

lo civil de esta Capital para su conocimiento. Ilágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*L. Velasquez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Junio de 1874.—*E. Landa.*

## COMISO.

*Juicio seguido ante el C. Juez de Distrito del Norte de Tamaulipas, con motivo de la excedencia en cantidad que el Vista C. Demetrio Chavero encontró en el peso neto de treinta barriles coñac, que, entre otros efectos, importó D. Enrique Sanroman, del comercio de Matamoras.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

II. Matamoras, Noviembre 7 de 1873.—Visto el presente juicio, del que aparece por el parte inserto á fojas 1ª, del Vista de la Aduana marítima de este Puerto, C. Demetrio Chavero, que al despachar el permiso provisional fronterizo núm. 55, á favor del Sr. D. Enrique Sanroman, en el neto de los 30 barriles coñac que figuran en la 1ª partida, encontró una excedencia de 1,140 kilogramos 48 céntimos de kilogramo; vistos: la elección que por escrito hizo el interesado de la vía judicial para resolver el negocio; la liquidación formada por la Contaduría de aquella oficina, arrojando \$ 656 6 es., como suma de los dobles derechos de importación, que conforme al arancel han de cobrarse; el acta del juicio verbal requerido por la ley con la ratificación del mencionado parte de consigna, hecha por el emplea-

do que lo suscribió; lo pedido por el Ministerio público; lo contestado por el C. Lic. Cristobal Montiel como representante del demandado; el auto en que se mandó recibir el negocio á prueba; las rendidas por la promotoría, únicas que se recibieron, por que ningunas produjo la contraria, y

Considerando, en cuanto á los puntos de hecho: Que el reo, aunque opuso tres excepciones, rectificándolas á fojas 7, solo dejó en pie la segunda, reducida á que el Sr. D. Justo Sanroman, que fué quien por la casa de este nombre se presentó á hacer el despacho en la Aduana, acababa de informarle ser exacto que hubo la excedencia en el peso bruto de los cuatro ó cinco barriles que se reconocieron, pero que ninguna operación se practicó para saber su peso neto, que es el que causa el derecho de 33 es. por kilógramo, según la partida 135 del art. 18 del arancel; que los actos del C. Vista tienen en su favor la presunción de ser justos, y por lo mismo, para atacarlos eficazmente, no basta negarles esa calidad, sino que se necesita probarlo; que el demandado no produjo prueba alguna de su objeción, y apoyado en su dicho aislado, debe reputarse como insubsistente; que á mayor abundamiento, existen en su contra las declaraciones de los CC. Administrador, Sebastian García; Contador, Alberto Díaz, y Comandante del Resguardo, Delfín Baeza, de fojas 8 á 9, en las que el primero asevera: "que no pudo concurrir al despacho de esa carga, pero que al concluirlo, subieron á darle cuenta de la excedencia enuncian- da el Vista y el Contador, y que hallándose presente D. Justo Sanroman, nada objetó." El segundo afirma, que vió medir los barriles de coñac, y resultó la predicha excedencia, de la que quedó plenamente convencido el comisionado de la casa, añadiendo que llegó luego D. Enrique Sanroman, que reiteraron delante de él la operación; que dudando de ella, la rectificó personalmente éste Sr., midiendo tres barriles, y tuvo que conformarse con aquel resultado. Y

el tercero depone que presenci6 la medida y nada reprochable not6 en ella; que por las dificultades ofrecidas llamaron 6 D. Enrique, y no contentos con esto, hicieron tambien venir al Sr. Legl6, verdadero duefio de la carga, quienes despues de todas las operaciones hechas, quedaron convencidos de la notabilisima excedencia que result6, asegurando los dos primeros declarantes en consonancia con el Vista en su ratificaci6n de fojas 6, que por esa conformidad y por que D. Enrique Sanroman se comprometió con el C. Administrador 6 quedar responsable de los derechos que se causaran, se le permiti6 sacar los barriles de coñac, cuyas aserciones robustecen la buena y legal justificaci6n del cuerpo del delito, y bastan para tener al reo por convicto.

Considerando respecto de los puntos de derecho: Que el apoderado del Sr. D. Enrique Sanroman, est6 de acuerdo en que la pena correspondiente al delito de que se trata, es la del doble derecho de importaci6n; pero pretende, que como los efectos que se introducen 6 la Zona Libre no causan los derechos que señaala el arancel, sino que por privilegio expreso en el art. 19 del decreto de 17 de Marzo de 1858, solo causan el Municipal, este es únicamente el que debo duplicarse al imponerse la pena, reputando la otra excesiva y contraria 6 las franquicias concedidas al comercio de los pueblos agraciados; vista la citaci6n para sentencia, y

Considerando: Que aunque el decreto de 17 de Marzo de 1858 est6 vigente, en el no se fijan penas para los casos de contrabando por suplantaciones, ni las menciona siquiera, por lo que es imposible resolverlos ateniéndose 6 su testo.

Que ese decreto constituye un privilegio especial 6 favor del comercio de los pueblos de la Zona Libre, y por su mismo car6cter debe interpretarse de una manera estricta, que es la especie de interpretaci6n que est6 universalmente reconocida, que se debe dar 6 las leyes de una naturaleza excepcional.

Que las leyes comunes siguen y son siempre aplicables en todo lo que no se sustraiga 6 sus prescripciones, sino 6 virtud de una excepci6n legal, y solo en aquellos puntos que comprenda la excepci6n.

Que como corolario de los principios precedentes se deduce, que no exceptuando del derecho comun los casos de suplantaci6n, el decreto de Zona Libre, como no los exceptua, tienen que juzgarse con total arreglo al arancel de Aduanas m6ltimas y fronterizas de 19 de Enero de 1872, que es la ley promulgada para el comercio en general, y que expresamente los comprende.

Que esta ley arancelaria dice en su art. 86: "Son casos de contrabando.....IV: la suplantaci6n en cantidad 6 en calidad de efectos, que legalmente manifestados pagarían mayores derechos." Y en la fracci6n II del art. 87, añaade: "Para los casos especificados en la fracci6n 49 del artícuo anterior, se impone la pena de pagar dobles derechos de los que debieran causar los efectos 6 su importaci6n, conforme 6 este arancel, calculándose los dobles derechos sobre la cantidad suplantada, cuando la suplantaci6n fuese en cantidad; y sobre la cuota que legalmente debe pagar la mercancia, cuando la suplantaci6n fuese en calidad."

Que la excepci6n opuesta por el demandado es insostenible, ademas de los fundamentos vertidos por los siguientes:

En primer lugar, porque el artícuo del decreto que en su apoyo cita, dispone: que los efectos extranjeros que se destinan al consumo de los pueblos de la Villa del Rio Bravo, ser6n libres de todos derechos, con excepci6n de los municipales; pero como se v6, ni habla de derecho de importaci6n, ni los municipales 6 que se refiere pueden comprenderse propiamente bajo aquella denominaci6n; por lo cual le falta la base, y no existe allí esa unidad que para cumplir con el arancel tiene que duplicarse.

En segundo lugar, por que el mismo arancel en su art. 87 antes trascrito, no se limita 6 prescribir simplemente que la pena

sea de los dobles derechos de importacion, sino de los dobles derechos que debian causar los efectos á su importacion, conforme á este Arancel, cuyo periodo final pone fuera de duda que los que han de duplicarse indispensablemente, son los de importacion, determinados en él para el comercio en general.

En tercero, por que entre esas dos maneras de proceder, es notabilísima la diferencia que resulte de cada operacion, como lo demuestra este ejemplo, tomado de los casos mas comunes: Aplicando el Arancel de setenta y dos, cien tercios de indiana de cincuenta piezas cada uno y de treinta pulgadas de ancho, causarían de derechos de importacion, \$ 10,535 12 cs.; si por evento resultaran diez piezas de excedencia en cada uno y del mismo ancho ya expresado, esta sola excedencia causaria de derechos de importacion, la cantidad de \$ 2,107 9 cs.; y dobles, montarían á \$ 4,214 18 cs.

El derecho Municipal, consiste en un 37 por ciento sobre la cuota que debieran causar los efectos por derecho de importacion; de consiguiente, en la excedencia del supuesto ejemplo, solamente se exigiría por derecho Municipal, la cantidad de \$ 28 86 cs.; el doble de ella ascendería á \$ 57 72 cs, que comparados con los dobles de importacion del Arancel, arrojan una diferencia contra las rentas del Erario, de \$ 4,156 40 cs.

En cuarto lugar, por que si prevaleciera que la pena en cuestion habia de reducirse al doble del derecho Municipal, ni repararía el mal que el delito causara, ni retraería á los otros de cometerlo, en razon de que muchos aventurarian tentativas de esta especie, cuyos frutos, logrados, eran pingües, y el castigo casi irrisorio, si descubierta el fraude se frustraban, contra los objetos de toda pena, que como lo expresa su antigua definicion, es enmienda de fecho ó escarmiento, que es dado segun ley, á algunos, por los yerros que hicieron.

En quinto lugar, por que el decreto de Zona libre, si por un lado le otorga al co-

mercio de esta frontera los mas amplios privilegios, por otro tambien castiga el contrabando con severísimas penas, en términos de que la menor que impone, por la mas leve infraccion de sus prescripciones, es la de la pérdida absoluta de los efectos hallados en contravencion, de modo que ni su letra ni su espíritu, pueden invocarse eficazmente por el reo en defensa de su escapeion, y la pena que quiere que se le imponga, por lo leve, no guardaria proporcion con las que el mencionado decreto sanciona.

En sexto lugar, por que aquel decreto especial dice en su art. 2º, que, "los comerciantes que quieran disfrutar de esta franquicia, (libertad de todos derechos) pueden trasportar sus mercancías, ... sujetándose en su traslacion á las disposiciones prescritas en los reglamentos de Aduanas marítimas y fronterizas... agregando estas notables palabras, con el fin de evitar introducciones clandestinas en perjuicio de las rentas nacionales;" y repite en el art. 8º: "que la gracia que se concede por este decreto, no debe ceder en perjuicio de las rentas nacionales... las que con evidencia quedarían perjudicadas contra estas terminantes salvadoras, si en el punto en cuestion dejarán de cobrarse las penas de Arancel."

En sétimo lugar, por que el repetido decreto fué promulgado con el fin de favorecer al comercio, no al contrabando que es el que se defiende aquí, y al que siempre se persigue con rigor; de modo, que muy bien puede y debe castigarse este tráfico ilegal ó fraudulento, con la severidad que las leyes determinan, sin que pueda objetarse, en razon, que con ellos se afectan los intereses del comercio de buena fé, que siempre continua en el perfecto y pleno goce de sus franquicias, y cuyo bienestar aumenta estirpando ó disminuyendo en lo posible á aquel delito.

En octavo y último lugar, por que en favor de la pena arancelaria existe tambien la interpretacion usual, pues esta pena no solo es la que desde antes se ha aplicado á

los casos ocurrentes de esta especie por los Tribunales de 1ª instancia, sino que sus fallos, en este sentido, han sido confirmados por el Superior,

Se declara: que el Sr. D. Enrique San Roman, debe pagar por la suplantacion en cantidad, materia de este juicio, los seiscientos cincuenta y seis pesos seis centavos, que causaron los dobles derechos de importacion, segun los artículos de la ley arancelaria antes trascrita.

Notifíquese; repongase el papel del juicio por el del sello correspondiente; sáquense tres copias de este fallo, de las que se remitirán, una al Ministerio de Hacienda, otra á la Aduana marítima de este Puerto, y la tercera al Semanario Judicial para su publicacion, y recibida la distribucion que corresponde, elévese original el expediente al Superior Tribunal de Circuito, en revision.

Así definitivamente juzgando y sentenciando, lo proví yo el Juez de Distrito, y lo firmé con los de asistencia. Doy fé.—*Manuel Mendiola.*—*Tomás Villareal.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal  
del Tribunal de Circuito.*

C. Juez de Circuito.

El Promotor fiscal dice: que el Juzgado de Distrito de Matamoros, por sentencia de 7 de Noviembre del año próximo pasado, condenó al Sr. D. Enrique San Roman, al pago de seiscientos cincuenta y seis pesos seis centavos, como dobles derechos de importacion, causados por mil ciento cuatro kilogramos ocho céntimos de kilogramo, que el Vista C. Demetrio Chavero encontró de excedencia en una partida de treinta barriles coñac, al despachar el permiso provisional fronterizo expedido á favor del Sr. San Roman el 15 de Julio del citado año, con cuya sentencia no estuvo conforme San Roman, é interpuso el recurso de apelacion que le fué admitido; habiendo mejorado dicho recurso el Sr. D. Valentin Rivero en representacion

del apelante, y despues de traído original el juicio ante la Superioridad, formalizó su expresion de agravios la parte, por medio de su apoderado el C. Iac. Rafael F. de la Garza.

En esta expresion de agravios se asegura, que solo algunos barriles y no todos, como debió haber sucedido, fueron reconocidos, y que por consiguiente, los mil ciento cuatro kilogramos, fueron computados por un menor cálculo, que no puede ser exacto, cuya aseveracion no está conforme con lo que de autos consta; pues en contrario, no solo obra la circunstancia de haberse hecho ante el Juzgado la misma objecion, ofreciéndose justificarla debidamente, sin que pudiera rendirse prueba alguna que tendiera á aquel fin, sino tambien y principalmente, las declaraciones de los CC. Sebastian Garcia, Alberto Diaz y Delfin Baeza, que están demostrando sin lugar á duda, no solo que la operacion se hizo con todos los barriles, sino que aun el mismo San Roman quedó convencido de la real existencia del exceso; puesto que hallándose él presente, se repitió la operacion, lo cual está indicando que al asentarse como agravio el hecho de que nos venimos ocupando, no se fijó la atencion en las constancias del juicio original.

Sostiene el apoderado de San Roman, que se cometió un error al pedir el permiso para la importacion del coñac, y que este error, si bien debe enmendarse, no puede constituir un delito, puesto que no hubo intencion de defraudar á la Hacienda pública, ni es de suponerse tampoco, cuando á primera vista y sin necesidad de mayores indagaciones, debia descubrirse la diferencia en el peso de los barriles; mas el que suscribe sin tratar de escudriñar los motivos que impeleron al Sr. San Roman, á solicitar el permiso, designando un peso, resultando otro al despacharse, solo comprende, y dice que á nadie se oculta, el que sería un precedente de fatales consecuencias para los intereses de la Hacienda, el admitir explicaciones mas ó menos verosímiles en cuanto al hecho

de que aquí se trata, pues es indudable que en la mayor parte de casos de contrabando, los interesados podrían hacer semejantes ó iguales explicaciones, que una vez admitidas como buenas, es incalculable el perjuicio que resentiría el Erario.

Por lo que hace á la falta de intencion de defraudar, y al lucro que de tal fraude podría resultar á la casa del Sr. San Roman, nada dice el Promotor, porque ni encuentra pruebas de que haya faltado aquella, ni cree necesario que para que los delitos se castiguen, sea preciso que de su comision pueda resultar provecho ó ganancia á sus autores, ni por último, tales circunstancias pueden influir gravemente, cuando consta la realidad del hecho.

No comprende el Promotor como el apoderado del apelante asienta en su escrito, que suponiendo que el error cometido por su parte mereciera alguna pena, esta debería ser la del pago de *dobles derechos municipales*, puesto que el puerto de Matamoros á donde eran importados los barriles, se encuentra dentro de la Zona libre, y sugeto por lo mismo, á la ley de este nombre, y no lo comprende, porque en dicha ley nada se dice del pago de *dobles derechos*, ni está previsto el caso de contrabando por suplantacion, y mal puede por lo mismo aplicarse una pena que la ley no designa.

Ahora bien, cuando en una ley especial no está comprendido un hecho determinado, debe indudablemente recurrirse al derecho comun, y en el caso que nos ocupa, puesto que la ley de Zona no lo ha previsto, es evidente que debemos atenernos á las leyes dadas para el comercio en general, y estas leyes para la importacion, no pueden ser otras que el arancel de 19 de Enero de 1872, tanto mas, cuanto que expresamente se ha dado para las aduanas marítimas y fronterizas.

Este arancel en su artículo 87 fraccion 23, impone la pena de pagar *dobles derechos* de los que debieran causar los efectos á su importacion, conforme á él mismo, siempre

que haya suplantacion en cantidad ó calidad; el apoderado pregunta que derechos debieron causar los mil ciento cuatro kilogramos de coñac de excedencia á su importacion en Matamoros, y el mismo contesta, que pura y simplemente los municipales, y por consiguiente, que habiendo lugar á pena, esta debía ser el doble de tales derechos municipales; mas esta contestacion, que al parecer está deducida de la fraccion citada, no es consecuencia lógica, pues al decirse en ella que los *dobles derechos* deben computarse, teniendo presente lo que debían pagar á su importacion los efectos, conforme al arancel, es innegable que apesar del beneficio de la Zona libre, al arancel debe atenderse para exigir las penas en que se incurre cuando se comete contrabando por suplantacion en cantidad ó calidad, lo cual es muy conforme con la severidad con que se castiga por nuestras leyes este delito; siendo de advertir, que al promulgarse el arancel de 19 de Enero, no es creible que á nuestros legisladores se ocultara la existencia de la ley sobre Zona libre, de que se infiere, que si se hubiera quando imponer penas mas benignas á casos como el de que aquí se trata, expresamente se habría prevenido en dicho arancel, y por lo mismo, el Juzgado de 13 instancia, al pronunciar su fallo, comprendió en su verdadero sentido la situacion en que la ley coloca á los puertos y puntos fronterizos del Norte de Tamaulipas, y los fundamentos en que apoyó su sentencia están arreglados á derecho, por lo que no hay motivo á juicio del Promotor, para que se revoque, debiendo por el contrario confirmarse en todas sus partes, en cuyo sentido extiende su presente pedimento.

Monterey, 13 de Marzo de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Es copia que certifico. Monterey, 30 de Abril de 1874.—*Lic. S. Roel.*

*Sentencia del Tribunal de Circuito.*

Monterey, 29 de Abril de 1874.—Visto en apelacion el presente juicio seguido ante el C. Juez de Distrito del Norte de Tamaulipas, con motivo de la excedencia en cantidad, que el Vista C. Demetrio Chavero encontró en el peso neto de treinta barriles coñac, que entre otros efectos importó D. Enrique San Roman, del comercio de Matamoros, con el permiso provisional número 55 de 15 de Julio del año próximo pasado. Vista el acta en que aparece lo expuesto por las partes en la audiencia verbal respectiva; las pruebas aducidas por parte del fisco durante el término que al efecto se concedió á solicitud del demandado, que ninguna rindió, no obstante haber ofrecido hacerlo; los alegatos de buena prueba; la sentencia que previa formal citación, pronunció el expresado C. Juez con fecha 7 de Noviembre de 1873 y en la que, por las razones y fundamentos legales en que la apoya, declaró obligado al Sr. D. Enrique San Roman, á pagar la cantidad de seiscientos cincuenta y seis pesos seis centavos, á que ascendieron los dobles derechos por la suplantacion mencionada. Vista la apelacion que de dicha sentencia interpuso el apoderado de San Roman, lo fué admitida y se mejoró oportunamente; la expresion de agravios que por parte del apelante se presentó en esta 2ª instancia; el pedimento fiscal y cuanto mas de los autos consta, debió y convino verse.

Resultando: que al practicarse el despacho de las mercancías importadas con el permiso provisional número 55, de que se ha hecho mérito, en una partida de barriles coñac, resultó una excedencia de ciento cuatro kilogramos, cuarenta y ocho céntimos peso neto, de cuya excedencia ó suplantacion en cantidad, quedaron convencidos D. Justo San Roman, agente de la casa, un Sr. Legle y D. Enrique San Roman, á quien se le permitió por la Aduana sacar la carga, quedando comprometido á responder por los derechos fiscales; que despues de un mes, por resistirse este á hacer el pago de

los dobles derechos, se entabló este juicio, en el que sostuvo y ofreció probar que la operacion practicada por el Vista no era exacta, y que aun supuesta la suplantacion, no debian pagarse por ella, atendido el beneficio de la Zona libre de que disfruta Matamoros, sino dobles derechos de los que realmente causa la importacion de los efectos á dicha plaza, que son los municipales.

Considerando: que las apreciaciones que el C. Juez de 1ª instancia ha hecho en la sentencia apelada, tanto respecto de los hechos como del derecho, son exactas; pues en efecto, aparece suficientemente probada la suplantacion que ha motivado este juicio, y bien aplicado el derecho al imponer en el caso la pena de pagar dobles derechos de los que el efecto suplantado debió causar á su importacion, conforme al arancel vigente, sin atender á la ley de la Zona, tanto por que esta no habla de los casos de suplantacion, como porque el beneficio concedido por dicha ley, debe entenderse lo ha sido á los que cumplan con sus prescripciones y no á los que las infringen, pretendan ó no con esta defraudar al Erario sus derechos.

Fundado en lo expuesto, el C. Magistrado dijo: que debia fallar y falló.

Primero: se confirma en todas sus partes y por sus propios legales fundamentos, la sentencia apelada fecha 7 de Noviembre del año próximo pasado, en que se declaró obligado á D. Enrique San Roman á pagar la cantidad de seiscientos cincuenta y seis pesos seis centavos, importe de los dobles derechos causados por la suplantacion en cantidad de que se ha hablado.

Segundo: notifíquese á quienes corresponde, expíase ejecutoria de esta sentencia, y remitiéndose al C. Juez de Distrito del Norte de Tamaulipas para los efectos legales, mándense los autos originales á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, conforme está dispuesto por la ley y para los efectos que esta expresa, adjuntándose copia de la sentencia y dictámen fiscal respectivo.



El C. Lic. Rafael Treviño y Garza, Magistrado del Tribunal de Circuito de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas, así definitivamente juzgando, lo decretó, mandó y firmó, por ante mí. Doy fé.—*Lic. Rafael Treviño y Garza*—*Amado Valdés*, secretario.

Es copia que certifico. Monterey, 30 de Abril de 1874.—*Amado Valdés*, secretario.

*Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.*

El Procurador interino dice: Que en el Juzgado de Distrito de Matamoros, en 19 de Agosto del año próximo pasado, se inició el presente juicio de comiso contra D. Enrique Sanroman, con el fin de que pagase dobles derechos por la excedencia del peso neto de treinta barriles de coñac amparados con el permiso provicional número 55 de 15 de Julio de 1873. Celebrada la junta de ley y corridos los demas trámites del juicio, el mencionado Juzgado de Distrito lo sentenció definitivamente en 7 de Noviembre del mismo año, condenando á D. Enrique Sanroman al pago de \$ 556 6 cs., que importan los dobles derechos de importacion, por la suplantacion indicada. Esta determinacion fué confirmada por sus propios legales fundamentos, en 29 de Abril del corriente año, por el Tribunal de Circuito de Monterey; así es que causó ejecutoria conforme al art. 48 de la Pauta de comisos, de 26 de Octubre de 1842.

El que suscribe, considerando arreglada á derecho esta determinacion, y no encontrando motivo para exigir la responsabilidad á los jueces que intervinieron en este proceso, pide á esta 1ª Sala se sirva darlo por revisado.

México, Junio 3 de 1874.—*Garcia Ramirez*.

*Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Junio 5 de 1874.—Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José M. Iglesias*.—*M. Auza*.—*Juan J. de la Garza*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*S. Guzman*.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Junio 20 de 1874.—*Alejo Gomez Eguarte*, oficial segundo.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por el C. Andrés Campillo, contra la providencia del C. Gobernador del Estado, que lo condenó á sufrir tres meses de prision en defecto de quinientos pesos de multa, por haber publicado un impreso snello en que agravia á aquel funcionario.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor dice: que el C. Andrés Campillo solicita amparo de la Justicia de la Union, contra el hecho de la Gofatura política de la Capital, que lo condenó á una multa de quinientos pesos ó en su defecto un mes de arresto, por la publicacion de la hoja suelta que forma la 1ª de esta pieza, solicitando al mismo tiempo la suspension del acto de prision que lo tenía privado de su libertad; fundendo su queja en la infraccion de garantías concedidas en el art. 7º de la Constitucion general de la República, y en la fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Ese Juzgado atendiendo á la urgencia notoria y segunda de aquellas peticiones, tuvo á bien declarar la libertad del quejoso y pe-